



V JORNADAS DE ECONOMÍA CRÍTICA

LA CRISIS GLOBAL COMO CRISIS DEL
PENSAMIENTO ECONÓMICO

LAS CONSECUENCIAS DE LARGO PLAZO DE LA CRISIS: ¿EUROPA EN DECLINACIÓN?

ANDRÉS MUSACCHIO

23, 24 Y 25 DE AGOSTO DE 2012 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ARGENTINA

Las consecuencias de largo plazo de la crisis: ¿Europa en declinación?

Andrés Musacchio¹

¿Crisis? ¿Qué crisis?

Desde su estallido, la crisis europea ha dado lugar a múltiples interpretaciones con respecto a su origen, a sus condicionantes y a su posible evolución. En el fondo, sus aristas nos remiten a una crisis integral del modelo de desarrollo económico y social que se impuso en la región desde principios de los 80 y que se condensó en un proceso de integración trazado a la medida de las nuevas pautas, con características muy diferentes a las de la integración en las décadas del 50 y del 60.

El fenómeno más evidente del actual colapso europeo es la crisis de la deuda. Varios países, en general las economías más débiles de la región, pero también algunas de las grandes como Italia, se encuentran jaqueadas por una abultada deuda externa, al borde de una cesación de pagos e imponiendo severos ajustes internos. Sin embargo, esa deuda no surgió por generación espontánea, sino que fue el resultado de un proceso de integración monetaria con una moneda sobrevaluada y con altas tasas de interés, que favoreció la especulación financiera y la expansión del sector servicios, pero golpeando al sector industrial. En los países más afectados por el endeudamiento, las condiciones de la revaluación fueron aún mayores, potenciando las características más perversas del modelo. Ahora bien, una crisis originada en una inadecuada gestión monetaria, que golpea a amplios sectores productivos y termina provocando quiebras en cadena y dilemas serios de política económica no puede ser calificada como una crisis monetaria o financiera. Es una grave crisis económica. Si, además, observamos los índices de desocupación y subocupación, así como el paulatino deterioro de las condiciones laborales, descorremos el velo de una crisis del mercado de trabajo, la más profunda desde la postguerra.

Los rasgos de la debacle han comenzado a poner en discusión el modelo de integración. Desde el punto de vista técnico, el euro como moneda común se hace cada vez más difícil de sostener sin cambios radicales. En esas condiciones, la imposición de la moneda a los países de la Unión Europea que aún no se han incorporado ha quedado descartada por completo. Más bien, es razonable pensar en que varios de los miembros de la Eurozona abandonarán el área monetaria común. Por otra parte, las consecuencias sociales de la integración y de los programas de ajuste que se introdujeron desde el estallido de la crisis económica han incentivado notablemente la resistencia social al proceso de integración en general. Por lo tanto, la crisis puede caracterizarse también como una crisis de la integración.

¹ Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales (IDEHESI), FCE-UBA-CONICET..

En ese marco, amplios sectores de la sociedad se expresan cada vez más contundentemente contra los programas de ajuste nacionales, que nos remite a otras tres dimensiones. Una, obviamente es la crisis social. La segunda es la crisis de las políticas públicas cada vez más ineficaces para imponerse a la población pero también para actuar contra los problemas que seguen profundizándose. Finalmente, el deterioro sin fin pone en la picota a las estructuras políticas, manifestada en el derrumbe de varios gobiernos, cuyos premier renunciaron anticipadamente o perdieron las elecciones, mientras otros líderes ven con preocupación su sostenimiento.

El carácter complejo de la crisis le confiere una virulencia inusitada, a la vez que dificulta la búsqueda de soluciones. Dado que los modelos económicos y sociales vinculados al neoliberalismo y la integración basada también en un modelo neoliberal se encuentran en la base del colapso, no parece viable una solución en el marco de las políticas actuales. Pero justamente la radicalización de las mismas ha sido la respuesta de las autoridades nacionales y regionales para revertir la crisis, por lo que no extraña su paulatina profundización. En el presente artículo nos proponemos partir de algunas de estas cuestiones para reinterpretar las causas de la crisis. Procuraremos mostrar que se trata de algo más profundo que una simple crisis económica y que condiciona en el largo plazo la posición europea en la economía y la política mundiales, pudiendo hablarse de una "crisis de la civilización europea".

Crisis de la deuda: ¿Estados dispendiosos?

La puerta de entrada a las turbulencias europeas es el enorme endeudamiento público de algunos de los países de la Unión. Varias naciones del Este, pero también España, Portugal Irlanda y Grecia se acercan día a día a la insolvencia, a pesar de drásticos recortes en los presupuestos y programas de ayuda externa. No solo los países "chicos" se encuentran al borde del colapso; algunos de los "grandes" han comenzada a pasarla realmente mal, especialmente Italia, mientras la consultora Standard & Poor's rebajó el 13 de enero de 2012 la calificación de las deudas francesa y austríaca.

Efectivamente, los niveles de endeudamiento de varios estados de la Eurozona superan el tope impuesto por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, establecido en el 60% del PBI. De allí la fuerte presión para que introduzcan fuertes restricciones en el gasto público, incrementen la capacidad de recaudación y, cumplidas estas exigencias, reestructuren el perfil de la deuda. Los programas impulsados por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (la "troika") son los tradicionales para estos casos: reducción de salarios en el sector público y presión para la reducción en el sector privado, reducción de jubilaciones y pensiones, despido masivo de empleados públicos, recorte de todo tipo de gastos e inversión del Estado, incluyendo educación, seguridad social y salud, incremento drástico de los impuestos al consumo y eventualmente incrementos moderados de los impuestos directos. Además, avance en transformaciones estructurales como privatizaciones, eliminación

de las regulaciones al mercado y flexibilización laboral, con el objetivo de mejorar la competitividad. En síntesis, profundización de las políticas neoliberales para mejorar la rentabilidad empresarial, descargando el peso del ajuste sobre trabajadores, desocupados y jubilados. Tales planes se extienden desde los países bálticos, a los de Visegrad, Portugal, Italia, Irlanda Grecia o España, estos últimos cinco denominados despectivamente los PIIGS por sus iniciales en ingles. No abundaremos en un tema conocido.² La evaluación que hacen los organismos internacionales sobre el origen de la crisis de esta parte del continente es, por lo menos, cuestionable. Según el FMI, por ejemplo, "La crisis puso de relieve una falta de disciplina suficiente en las políticas para permitir el funcionamiento eficaz de la Unión Monetaria Europea (UME), lo cual dio lugar a un debate sobre la manera de remediar las deficiencias de la gobernabilidad económica de la zona del euro. Será importante que las propuestas que se están barajando produzcan cambios de profundo calado en los marcos de política: La disciplina fiscal debe ser exigible. Si bien es importante reforzar las sanciones y coordinar los procedimientos presupuestarios, a la larga resultará fundamental atribuir más autoridad sobre las políticas a nivel de la zona del euro, por ejemplo fijando límites de déficit obligatorios. Entre tanto, se podrían afianzar las reglas nacionales para dejar reflejada la necesidad de limitar los déficits." (FMI, 2010) Un estudio de la Unión Europea sobre Grecia compara los datos de 2000 con los de 2009 y llega a la conclusión de que "Los desequilibrios fiscales continúan siendo altos... Los objetivos fiscales fueron sistemáticamente desatendidos, a pesar de la situación económica de bonanza, existiendo sistemáticos excesos de gasto, evasión impositiva endémica y persistentes proyecciones demasiado optimistas sobre la recaudación. El tamaño del sector gobierno creció del 44% del PBI en 2000 a más del 50% en 2009..." (European Economy, 2010:3-4). El análisis de ambos documentos es, al menos, curioso. Si, efectivamente, se comparan las cifras de 2000 con las de 2009 en adelante, los problemas fiscales son alarmantes, pues el endeudamiento público creció notablemente. Sin embargo, los resultados se ven afectados por los efectos de la crisis, que provocó una caída del PBI, una retracción del pago de impuestos por la recesión, un crecimiento de los gastos para sostener las necesidades sociales y económicas en la depresión y, por supuesto, una contracción de la actividad privada que, vista al revés, parece un avance del Estado, cuyas cuentas suelen moverse menos y más lentamente. Si, en cambio, el punto de comparación fuese 2008, se vería que hasta entonces el endeudamiento público de los PIIGS se había mantenido relativamente bajo control en tres casos, se había reducido ligeramente en Grecia y había caído fuerte en España. Por lo tanto, no parecería estar ahí la clave de la crisis.

La interpretación de que las malas finanzas públicas, originadas en estados dispendiosos son el origen de la crisis, oculta el verdadero problema. Si se pone más atención en el proceso de formación de

² Interesante resulta la "voz oficial" de la propia Unión, en http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm, donde puede reconstruirse la cronología de los planes impuestos, así como los elaborados artículos de la revista European Economy, (http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/index_en.htm).

la deuda, la cuestión es mucho más compleja y descubre una trama de intereses y procesos que, no por reiterados en los modelos neoliberales, resultan menos atrapantes.³ Vayamos de adelante para atrás. Es cierto que algunos estados han gastado más de la cuenta, incrementando sus deudas y, en el caso griego, alterando las estadísticas para ocultarlo.⁴ Pero la gestación de la deuda fue un proceso con gran influencias del sector privado, como se ve en el siguiente cuadro:

EVOLUCION DE LA DEUDA PRIVADA
En porcentaje del PBI

	Familias			Empresas no Financieras			Estado			
	2002	2008	Difer.	2002	2008	Difer.	2002	2008	Difer.	2010
Irlanda	18.0	59.0	41	278.6	344.2	65.6	32.2	43.9	11.7	94.9
Grecia	56.7	113.4	56.7	109.6	104.8	-4.8	101.7	99.2	-2.5	144.9
España	28.8	59.9	31.1	264.9	336.2	71.3	52.5	39.7	-12.8	61.0
Italia	59.5	53.3	-6.2	196.3	212.7	16.4	105.7	106.1	0.4	118.4
Portugal	82.0	106.5	24.5	347.3	404.5	57.2	55.6	66.3	10.7	93.3

Fuente: Eurostat

En el caso de Irlanda, el motor del endeudamiento se encontró en las familias y en el sector empresario, mientras que para Grecia fue el sector familias, y para España, Italia y Portugal el sector empresario quienes más responsabilidad tuvieron en la contratación de préstamos. En todos los casos, el “tirón de deuda” del sector público se produce entre 2008 y 2010, provocado especialmente por la “asistencia” que los estados le dieron a empresas y familias para enfrentar la corrida. En la crisis, los acreedores intentaron recuperar la mayor parte posible de los créditos concedidos y remitir el dinero a sus matrices en el país de origen. Los estados de los países deudores tomaron créditos y diseñaron programas de asistencia para asegurar la cadena de pagos, una virtual estatización parcial de las deudas externas. En la fresca historia del neoliberalismo este procedimiento es frecuente en todos los puntos cardinales.

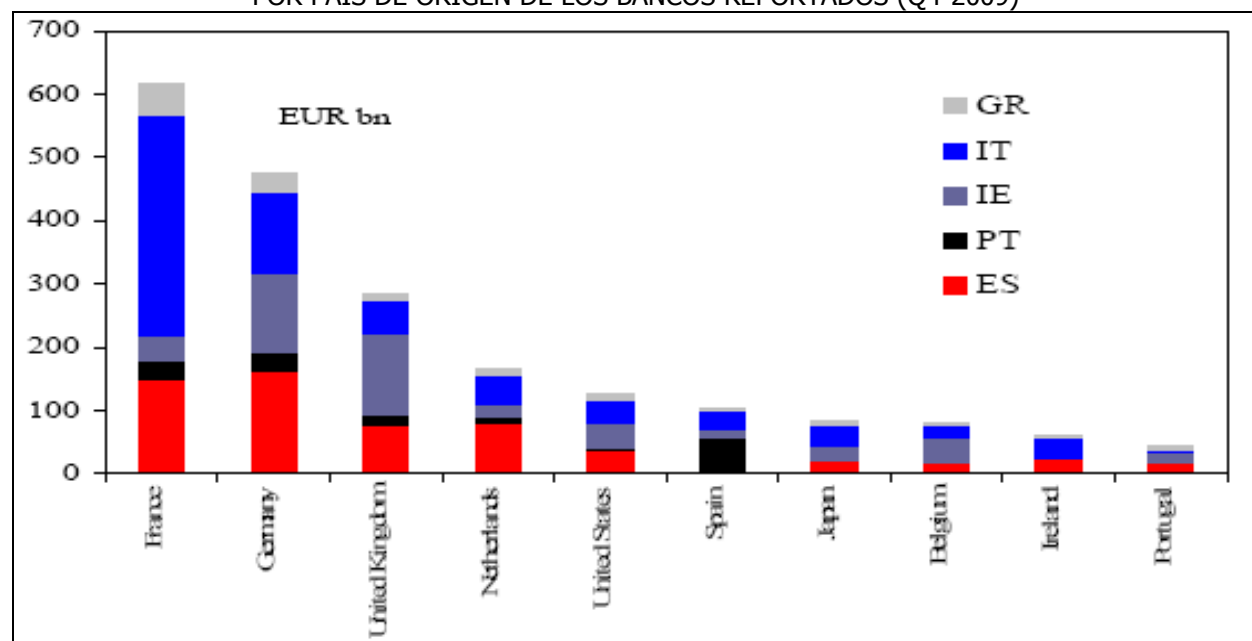
De la misma forma, los bancos tuvieron una responsabilidad grande en la financiación del endeudamiento, sin que oportunamente se pusiera reparo por parte de las autoridades europeas o los organismos multilaterales. El negocio para la banca resultaba muy interesante, y se originaba en las altas tasas de interés de la férrea política antinflacionaria del Banco Central Europeo. Los recursos captados por el sector financiero encontraban dificultades para canalizarse masivamente hacia el sector productivo, pues precisamente las altas tasas conspiraban contra una inversión fluida, salvo en sectores con rentabilidad extraordinaria, entre ellos la construcción de grandes proyectos vinculados al turismo, con

³ Interprete el lector el término atrapante como más le guste.

⁴ Ocultarlo al gran público, pues quienes prestaban o monitoreaban las cuentas tenían plena conciencia de ello.

epicentro en la zona costera del mediterráneo. Por eso, el sector financiero de varios países europeos quedó sumamente expuesto, y los gobiernos de los grupos acreedores tuvieron que implementar luego del estallido de la crisis programas de asistencia a los deudores que permitieran evitar el colapso del sistema bancario. Es la otra cara de la moneda del endeudamiento de los estados.

EXPOSICION EN LAS ECONOMIAS PERIFERICAS DE LA EUROZONA
POR PAIS DE ORIGEN DE LOS BANCOS REPORTADOS (Q4-2009)



European economy (2010:11)

La deuda refleja, entonces, una trama compleja que une a acreedores y deudores privados, proyectos productivos y especulativos, estados y programas de rescate y ajuste. Para comprender la formación y la explosión de dicha trama, empero, deben abordarse las características y la dinámica del proceso de integración iniciado con el Acta única Europea y los modelos de desarrollo económico y social nacionales que le servían de base de sustentación. Si bien un desarrollo a fondo de la cuestión excede el objetivo de este trabajo, veamos esquemáticamente algunos de los problemas fundamentales.

El origen de la debacle: neoliberalismo e integración

Para comprender cabalmente la crisis no puede mirarse hacia atrás hasta 2008; deben estudiarse las características del modelo neoliberal que comenzó a imponerse desde finales de la década de 1970. Es allí donde comienzan a prefigurarse los problemas que harán eclosión en 2008. La imposición de un modelo neoliberal puede fecharse con cierta precisión en la Gran Bretaña de 1979. El modelo tendió a expandirse en los años siguientes por casi toda la región. Si bien en cada país tuvo una recepción y un contenido concreto diferente, las particularidades podrían caracterizarse como variaciones tolerables

dentro de un macromodelo común. Tres elementos resultan especialmente importantes para la reconfiguración de un proceso de integración que por entonces atravesaba una crisis de más de una década. En primer lugar, una compatibilidad de las características de los procesos de acumulación del capital, con una singular influencia del capital financiero; en segundo término, un nuevo anclaje del territorio de referencia de la acumulación, que se desplazó de los espacios nacionales hacia el espacio regional, con una tendencia expansiva que impulsó varias ampliaciones de la integración; y, finalmente, la imposición de una nueva relación de fuerzas entre los diferentes grupos sociales, reflejada en la dinámica institucional y que permitió la conformación de nuevos mecanismos de regulación y nuevas características en los espacios de la regulación, con una parcial pérdida de influencia del Estado y una creciente incidencia de los niveles regional y local. De esas transformaciones no era ajeno el derrumbe del “mundo socialista”, que anulaba la necesidad de mantener ciertos equilibrios sociales para evitar la expansión de las ideas socialistas y controlar las estructuras políticas que sostenían al capitalismo. La larga crisis de los países socialistas y su derrumbe final a principios de los 90 desinhibió algunas políticas que hasta entonces difícilmente habrían podido imponerse (cf. Deppe, 2000:339)

En el fondo, lo que se articuló en la primera mitad de los 80 fue un nuevo modelo de desarrollo que se desplegó sobre el espacio europeo y que remodeló la matriz social desde una perspectiva diferente a la de los modelos keynesianos previos. En ese marco, la integración adquiría un nuevo sentido, configurado entre la firma del Acta Unica Europea en 1986 y el Tratado de Maastricht en 1992. Se trataba de un proceso totalmente diferente al iniciado en 1958 y, por lo tanto, no debería considerarse como una profundización de aquel proyecto, pulverizado a lo largo de los 70. Si bien las instituciones básicas formalmente son las mismas, sus funciones cambian por completo y, de hecho, una de las discusiones principales de los trabajos académicos de los últimos años se ha centrado en la cuestión de la estatalidad de los organismos supranacionales europeos⁵. Tampoco se plasma sobre un mismo espacio económico la acumulación de capital. La reestructuración territorial y la configuración de nuevos circuitos productivos fueron desplegándose por el territorio e incluso excediéndolo, por lo que también el espacio físico sobre el que se proyectaron las instituciones europeas se expandió, primero hacia el sur, luego hacia el norte y por último hacia el este. Esas expansiones, y en especial la última, deben ser estudiadas a la luz de la dinámica que cobraron los servicios en la matriz productiva, que también se diferencia notablemente del pasado. La importancia de los servicios financieros primero, y luego el despliegue de servicios públicos privatizados que dieron lugar al surgimiento de empresas regionales con “voluntad” de actuar en un territorio semiprotegido dieron paso a una matriz diferente. Una matriz que se imponía en un territorio sumamente desigual en sus niveles de desarrollo relativo, lo cual, nuevamente, procuraba diferencias. La integración de los 50-60, estimulada por el sostenimiento de los modelos fordistas

⁵ Cf. por ejemplo, Karras (2009) o Ziltener (1999).

nacionales, debía, por fuerza, mantener cierto equilibrio entre los participantes. La integración que se gesta en los 80, en cambio, tiende a consolidar un espacio de acumulación en el que las transferencias de recursos forman parte de la dinámica general y admite –e incluso necesita- de una región subdesarrollada en la que pueda desplegarse un vínculo que sostiene la acumulación de la región central, con un control institucional “neutral” que garantice las condiciones de ordenamiento necesarias⁶. Finalmente, los mecanismos de regulación sobre los que se asienta todo el proceso, son sumamente distintos, luego del abandono de las dos formas principales de la regulación fordista, la regulación salarial para sostener la demanda y la gestión expansiva de la moneda y su reemplazo por formas de competencia que estimulen la rentabilidad del capital y una gestión disciplinadora de la moneda.

El punto de partida fue la liberalización financiera, que entre 1974 y 1994 fue estableciendo la libre circulación de capitales. Esto alteró radicalmente el escenario, pues permitió a los inversores financieros eludir políticas nacionales no deseadas con la rápida transferencia de sus fondos (Hufschmid, 2002). El aspecto esencial de la liberalización es la garantía de la opción de salida, la seguridad de una puerta abierta para fugarse cuando sea necesario. El sistema resulta perverso, pues al otorgar esa opción, los estados se autoimponen también la implementación de incentivos para evitar dicha salida y retener las inversiones en el territorio. Esto implica desplazar del centro de los objetivos de política económica problemas tales como el crecimiento o el desempleo por medidas que garanticen la rentabilidad de corto plazo, la movilidad y la seguridad del capital financiero. Un fenómeno de particular relevancia es la ruptura entre la localización del ahorro nacional y el espacio de la efectivización de las nuevas inversiones (Aglietta, 2000:50). A partir de la eliminación del control en el movimiento de capitales, es posible trasladar rápidamente el ahorro generado en un espacio nacional hacia el exterior, para financiar proyectos de inversión. Por lo tanto, los estados nacionales se ven arrastrados a la lógica del capital financiero, que los pone en permanente competencia por la captación y retención de recursos. Esa competencia se convirtió en uno de los motores de la liberalización de los mercados, de la flexibilización laboral y de las rebajas de impuestos directos, tratando de reducir costos y aumentar las perspectivas de rentabilidad ofrecidas.

En ese contexto deben interpretarse las dos nuevas ideas rectoras de la integración a partir de principios de los 80 -el mercado único y la unión monetaria-, que apuntaban a la consolidación de un espacio económico regional con una fuerte influencia conceptual de la “teoría de la oferta”. De acuerdo a Bieling y Steinhilber (2000:110), la reestructuración del proceso de integración debe entenderse como un esfuerzo de imponer y generalizar un proyecto de hegemonía neoliberal, plasmado en una combinación de elementos permisivos, de consenso y disciplinadores, que dieron lugar a dos lógicas combinadas: la de

⁶ Por eso algunos autores insisten en la idea de la configuración de una relación centro-periferia dentro de la UE (cf., Becker, 2004) o desarrollo-subdesarrollo (Musacchio, 2012).

la *desregulación competitiva* –estimulada por el mercado único- y la de la *austeridad competitiva*, vinculada a la unificación monetaria. En otros términos, el relanzamiento de la integración no se basa en una expansión territorial o de nuevas instancias de administración institucional (aunque las incluye), sino en un giro drástico de sus características y de sus objetivos explícitos e implícitos, que nos remiten a cambios no menos profundos en las relaciones entre los grupos sociales y en la distribución del poder entre ellos. La Comisión Europea fue trazando – en parte bajo la fuerte influencia de algunos grupos de presión- una serie de nuevas iniciativas, entre las cuales se destacaban la constitución del mercado único, las nuevas políticas industrial y de competencia y la unión monetaria. Con eso se pretendía estimular el crecimiento, pero sobre todo la competitividad de la producción europea, frente al desafío que planteaban otras regiones, como Japón y los Estados Unidos. Predominó en esa reestructuración la idea de que la competitividad puede fortalecerse sólo por medio de la transformación tecnológica y el liderazgo de grandes conglomerados empresarios regionales, que interactuaran en red con empresas más pequeñas y estamentos vinculados a la creación y difusión de tecnologías, como universidades u organismos estatales.

En ese marco, la integración se proponía jugar un rol aglutinante y constitutivo, al inducir las transformaciones, consolidar la armonización de normas y contribuir a la regulación del mercado común. Ya no se buscaba la expansión de un intercambio complementario a los mercados internos, sino la articulación de un aparato productivo regional, con nuevas relaciones industriales y nuevos procedimientos de regulación. La integración trataba de oficiar ahora de arena de negociación e intermediación para la contradicción entre la internacionalización de la valorización del capital por un lado y la estrechez de los mercados nacionales y de las barreras de los estados por el otro. Las diferentes dimensiones espaciales de la economía y la política comenzaron a ser “matrizadas” por el establecimiento de un espacio económico integrado y la transferencia parcial de funciones estatales –especialmente en los campos del comercio, la competencia y la política monetaria- hacia las autoridades regionales (Bieling, 2003; Statz, 1989). En ese espacio integrado, el nivel institucional europeo adquiriría varias herramientas para impulsar o profundizar el modelo neoliberal, en clara ruptura con el proyecto de los 50-60.

El punto de partida fue la concreción del proyecto del Mercado Común, que pretendía fortalecer la competitividad de las empresas europeas eliminando las restricciones restantes para la circulación de mercancías (las barreras técnicas y materiales), así como liberalizar los flujos de capitales y el desplazamiento de trabajadores. La insistencia sobre el fortalecimiento de la competitividad y la reducción de costos que el mercado único posibilitaría, era acompañada por un llamado a complementar la liberalización con algunos instrumentos que permitieran el saneamiento de las empresas en dificultades y el estímulo a la investigación y el desarrollo. El Acta Unica Europea apuntalaba la liberalización, con la que la Comunidad avanzaba en bloque en el camino de la primera lógica disciplinadora, la de la desregulación competitiva. Se imponía así el proyecto de unificación del espacio económico esbozado por

las empresas multinacionales, se derribaban diversas barreras que permitían a los estados cierto grado de protección a sus mercados laborales o a los sectores de pequeñas y medianas empresas. El disciplinamiento quedaba determinado también por la ausencia de una armonización de normas y políticas nacionales en esferas clave como el trabajo o la tributación. De esa forma, se las ponía en abierta competencia. La creciente presión por retener actividades forzaba a los países de la región a adoptar los mecanismos más flexibles y regresivos, so pena de perder densidad productiva.

Un elemento adicional al mercado común en ciernes fue el endurecimiento de la política desarrollada por el Sistema Monetario Europeo aún vigente. Aunque no se trataba de un programa coordinado, la necesidad de retener capitales a medida que avanzaba la liberalización, obligaba a los países europeos a mantener políticas monetarias más rígidas y, por lo tanto, los realineamientos característicos hasta 1987 se hicieron menos frecuentes (Hufschmidt, 2005). La mayor dureza monetaria, sin embargo, conspiraba contra el crecimiento económico y la creación de empleos que el mercado único debía impulsar. Por eso, las proyecciones que trazaba el Informe Cecchini, un estudio de la Comisión que mostraba los beneficios de la nueva dirección de la integración, pronto pasaron a ser datos inalcanzables.

El proceso de concentración, en cambio, continuaba su marcha acelerada. El nuevo perfil de la política de competencia que fue trazándose en los 90 siguió sosteniendo la idea de evitar el abuso de posiciones dominantes, pero no las posiciones dominantes en sí mismas. La ecuación quedaba alterada ahora por la necesidad de guardar un equilibrio muy fino entre competencia y competitividad. Si el problema europeo era el reducido tamaño de sus empresas, debía tolerarse e incluso estimularse la concentración. Por lo tanto, las políticas de competencia apuntaron a dar cierta coherencia al sistema, mitigar la dominación sin hacerla desaparecer, y reducir en lo posible la intervención de los estados nacionales por medio de subsidios. Especialmente problemática se plantearon las olas de fusiones y adquisiciones, pues era evidente que tales procedimientos tendrían a afectar la competencia. Pero en ese campo predominó una política laxa, que prefería la competitividad a la competencia. Los mismos estudios de la Comisión Europea hacen notar que desde que, tomó consistencia la nueva política de competencia, el 90% de un los 3000 pedidos de fusión presentados fue aprobado sin condicionamiento alguno. En los últimos 17 años se prohibieron solo 19 fusiones, mientras que en algunos pocos casos se exigieron condiciones adicionales. (Davies y Lyons, 2007).

El camino hacia una Europa neoliberal quedó sellado con el acuerdo para establecer una unión monetaria, proceso al que no todos los miembros de la Comunidad adscribieron, pero a cuya lógica no pudo escapar a largo plazo ninguno. Las características de la unión monetaria consagraban como política los mandamientos neoliberales. El objetivo fijado fue mantener una inflación inferior al 2%, para lo cual

debía recurrirse a una fuerte restricción monetaria y presupuestaria⁷. Así, en el Acuerdo de Maastricht primero (que definía las condiciones y el sendero de ajuste para arribar a la unión) y luego en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (que reglamentaba las políticas una vez implementada la unión), se establecieron precisas restricciones al déficit fiscal (menos del 3% del PBI), a la deuda pública (hasta 60% del PBI) y las cotas de inflación convergentes al umbral del 2% anual. Con esto, se consagraba la “austeridad competitiva” por la que se disciplinaba a los gobiernos a cerrar sus cuentas fiscales. Los gobiernos nacionales perdían paulatinamente herramientas de política económica, pues entregaban parte de la capacidad de regular el mercado interno, abandonaban la posibilidad de hacer política cambiaria, traspasaban la política monetaria al Banco Central Europeo y adscribían a férreas restricciones en la política fiscal (cf. Musacchio, 2008)

Ahora bien, existen dos formas de ajustar los presupuestos: reduciendo los gastos o incrementando los impuestos. El segundo camino, además, contempla la posibilidad de aumentar los impuestos indirectos o gravar ganancias, capitales y rentas financieras. Ninguna de estas cuestiones quedaba definida en la combinación de mercado único y moneda regional. Pero allí aparece la incidencia de la expansión del proceso de integración hacia Europa del este. Es que los países orientales ofrecían, luego del derrumbe de los modelos socialistas, condiciones extraordinarias en materia salarial, pero por sobre todas las cosas, estructuras tributarias recargadas en el consumo y con fuertes exenciones y desgravaciones a los impuestos al capital. Esa combinación podía convertirse en un atractivo poderoso para traccionar inversiones desde el oeste⁸. Por eso, las opciones para los ajustes fiscales de los países occidentales se achicaban al incremento de impuestos indirectos como el IVA. Sino, quedaba sólo el camino de la reducción de gastos, que, nuevamente, no debían afectar los costos empresarios. Por lo tanto, la poda debía recaer sobre los gastos sociales, la inversión pública o los gastos en educación y cultura. Lo que ocurriría finalmente sería la combinación de ambas opciones “disponibles”.

La experiencia europea muestra que existen terrenos donde la integración no se concreta, que quedan en manos de la instancia institucional nacional. Terrenos que definen, en el fondo, qué tipo de integración se busca, que modelo de economía y de sociedad se perfila, quienes se benefician y quienes se perjudican. En la posguerra, quedaba fuera la circulación de los flujos de capital, fraccionando los espacios de producción y acumulación. Esto ponía en competencia parcial los productos terminados⁹,

⁷ Es decir, se asumía explícitamente que la inflación tiene una causa monetaria y que la expansión monetaria se relaciona directamente con los déficit fiscales. Por eso, políticas monetarias y fiscales restrictivas asegurarían una inflación baja y esta, a su vez, es garantía del crecimiento, algo que la Unión no pudo verificar.

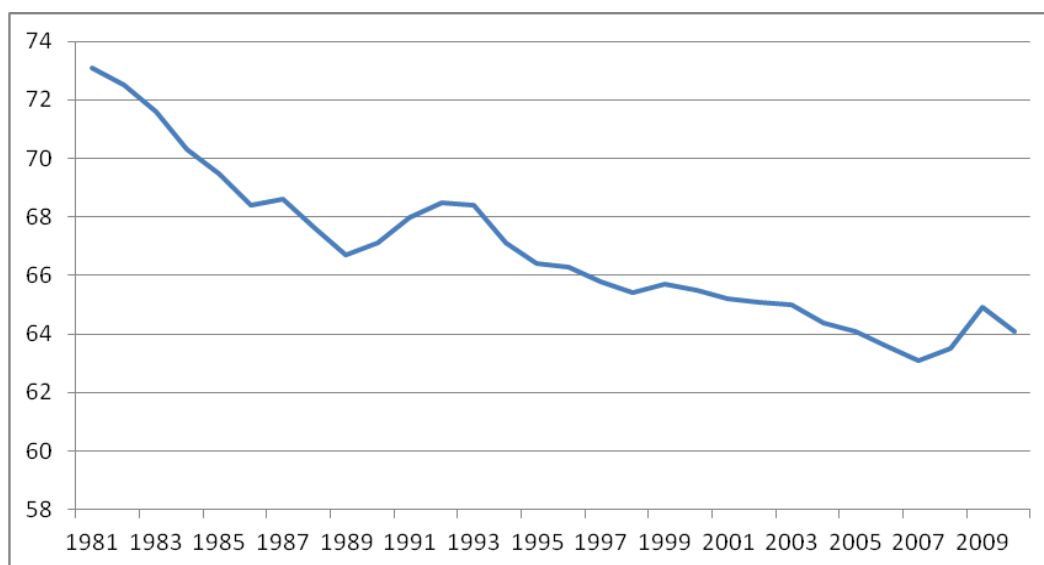
⁸ Debe apuntarse, no obstante, que el “dumping fiscal” no solo fue practicado por los países orientales sino por algunos de los viejos miembros de la Unión, especialmente Irlanda.

⁹ Aunque sólo en parte, pues el mercado principal era el mercado interno.

pero no a los espacios de producción, lo cual evitaba migraciones sistemáticas de capital. Por lo tanto, las condiciones laborales y los niveles salariales quedaban determinados dentro de cada espacio nacional. El nuevo esquema de integración, en cambio, levanta los tabiques al capital y pone en competencia directa a los espacios productivos. La movilidad mucho más limitada del trabajo por razones idiomáticas, de capacitación y culturales pone a los colectivos nacionales de trabajadores en competencia entre sí, iniciando una tendencia a la precarización y a la degradación de los estándares laborales. Asimismo, la falta de una fiscalidad común, de una matriz tributaria uniforme regional, internaliza en la conducta de los estados la competencia espacial para atraer o retener capitales, reduciendo impuestos directos, incrementando los indirectos y recortando el Estado de bienestar.

En el fondo, la nueva integración deja a los estados el mercado laboral como campo principal de intervención para los ajustes. No es ajeno a ello el fin de la Guerra Fría y la caída del régimen socialista. Los estados de bienestar de un conjunto de países situados en la frontera con el mundo socialista debían buena parte de su constitución precisamente a ese carácter fronterizo, pues servían como barrera al avance de las ideas y la penetración comunistas y como demostración de las bondades sociales del capitalismo. Derrumbados los sistemas socialistas, los estados de bienestar perdieron su carácter estratégico y pudieron ser acotados paulatinamente, a la velocidad que le permitieran las condiciones sociales internas de cada país. Las nuevas condiciones estratégicas en el plano internacional, las restricciones impuestas por la integración y las reestructuraciones internas fueron gestando desde principios de los 80 una "Europa del capital", una Europa mucho más permeable a las necesidades de los grandes consorcios empresariales que al sostenimiento de las condiciones de vida y de la equidad en la población. La imposición de esa Europa del capital puede verse con claridad en la distribución del ingreso. Los salarios no dejaron de perder participación desde la imposición del modelo liberal y tomando en cuenta solamente la Europa de los 12 (es decir, los miembros más antiguos), las remuneraciones cedieron casi 10 puntos, con ejemplos de gran virulencia, como Irlanda (-20%) o Austria (-15%).

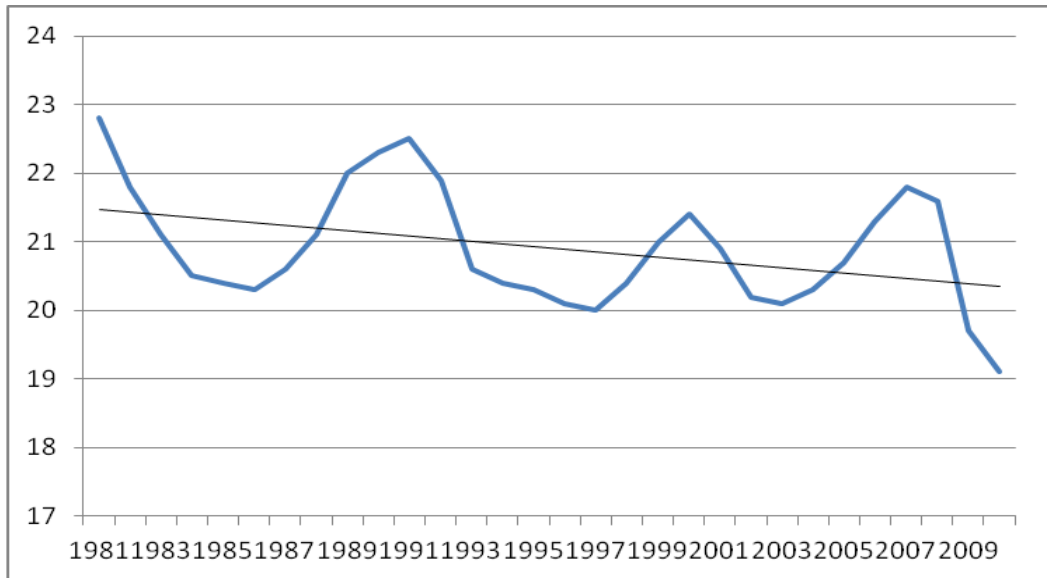
PARTICIPACION DEL SALARIO EN EL INGRESO, EUROPA DE LOS 12
N porcentaje del PBI



Fuente: European Economy.Statistical annex, spring 2010, p. 92.

La distribución regresiva del ingreso no es ajena al modelo neoliberal. Por el contrario, la explicación ortodoxa sobre la crisis del modelo de posguerra cabalgaba sobre la idea de que los salarios y el gasto público habían ahogado la rentabilidad empresarial y que una reconstitución del crecimiento sólo podía basarse en mejores condiciones para la oferta, es decir, una nueva elevación de la rentabilidad. A eso debía sumársele una política de estabilización de precios que eliminara el flagelo de la inflación y brindara certidumbre a los negocios. Bajo esas condiciones —enunciadas como la “teoría de la oferta”— podría recomponerse el proceso de inversión, base para la expansión. Sin embargo, la política antiinflacionaria seguida por el Banco Central Europeo provocó una fuerte revaluación del euro, restando competitividad externa, mientras la drástica contracción del mercado interno a la que condujo la caída de la participación de los salarios en el ingreso, los ajustes fiscales y las transformaciones de las matrices tributarias nacionales comprimieron la demanda regional. En ese contexto, la inversión productiva mantuvo a lo largo de las últimas tres décadas un comportamiento fuertemente oscilante, con ciclos muy marcados y una tendencia ligeramente descendente, como se observa en el siguiente cuadro.

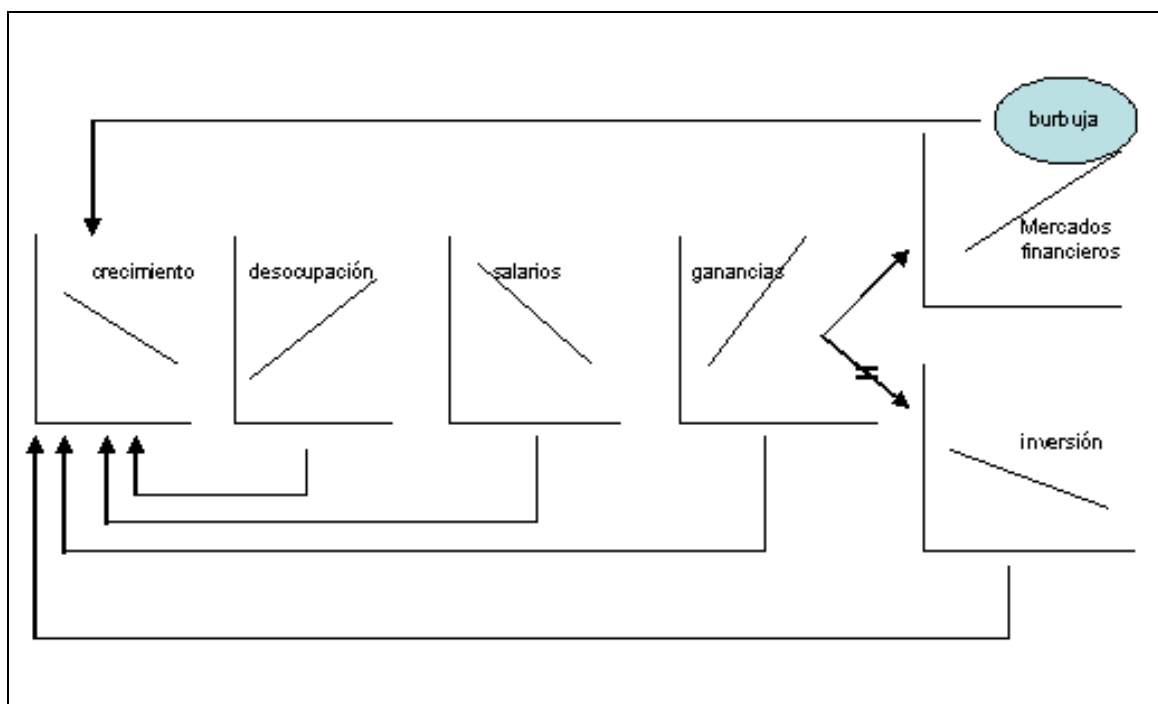
FORMACION BRUTA DE CAPITAL, EUROPA DE LOS 12 En porcentaje del PBI



Fuente: European Economy.Statistical annex, spring 2010, p. 66.

Ese es uno de los nudos gordianos del problema de largo plazo de la economía europea: una redistribución del ingreso a favor del capital, que se conjuga con tendencias recesivas. Se acumulan así fondos financieros que no se destinan a la producción y alimentan una corriente especulativa que atrae cada vez más recursos y debilita todavía más la inversión productiva. Mientras tanto, los agentes financieros deben colocar esos recursos, generando una espiral crediticia que puede destinarse temporariamente a financiar el consumo, la construcción y adquisición de bienes inmuebles y el sostenimiento –en el corto plazo– del nivel de vida de la población, a costa de pesadas hipotecas futuras. El proceso puede esquematizarse, siguiendo a Hufschmid de la siguiente manera:

CIRCULO VICIOSOS DEL ESTANCAMIENTO POSTFORDISTA



Fuente: Hufschmid (2008:60)

Sobre esa base general, sin embargo, se han ido gestando también en la última década algunas particularidades que, mas allá de los movimientos cíclicos, permiten prever el próximo final de una etapa mayor. Esas particularidades incorporan algunos fenómenos espacialmente más acotados, aunque fuertemente articulados entre sí.

Dos modelos complementarios

La dinámica económica no ha sido igual en todos los países de la región, así como no lo ha sido la forma en que cada uno de éstos ha internalizado el neoliberalismo. Bajo cierto marco común, se perciben dos enfoques diferentes. A uno podríamos denominarlo el **neoliberalismo a secas**, y al otro **neomercantilismo**. El primero reproduce por completo el esquema recién descrito, corriendo el eje de acumulación a la esfera financiera y a los servicios. Como contrapartida, se despreocupa de manera casi absoluta de lo que ocurre en la producción de bienes. En general, en los países que adoptaron esta variante, se registró una tasa de inflación mayor al promedio, precisamente impulsada por el sector de los servicios públicos, algunos servicios privados como el turismo o por los precios de la construcción. El fenómeno tuvo dos consecuencias inmediatas. En primer lugar, se elevaba el promedio de la inflación de la región, impulsando al Banco Central Europeo a actuar inmediatamente de manera restrictiva sobre toda la Eurozona por medio de altas tasas de interés. Las tasas fijadas por el Banco Central Europeo se mantuvieron durante buena parte de la década de 2000 sustancialmente por encima de las tasas de los

países desarrollados, en especial de Japón o de los Estados Unidos e incluso de Gran Bretaña, que no ingresó a la Eurozona (cf., por ejemplo, Musacchio 2008). En parte, el mayor costo financiero explica la performance más débil del crecimiento en la Eurozona que en el resto de los países desarrollados. Sin embargo, el menor crecimiento se asoció también al efecto que ejercían tasas más altas sobre el capital financiero, atrayendo un flujo de recursos que provocaban la revaluación del euro, afectando la competitividad de la industria en su conjunto.

En segundo lugar, la inflación más alta de algunos de los países de la región tenía un efecto similar al de la revaluación frente a los demás países de la Eurozona, incluso aunque la moneda fuese la misma.¹⁰ Por eso, el impacto era mucho más pronunciado, desencadenando además temporariamente un curioso fenómeno: dado que la inflación era mayor, las tasas de interés de referencia fijadas por el Banco Central Europeo resultaban menores en términos reales y, dado que se suponía muy bajo el riesgo de que alguno de estos países entrara en default y nulo el riesgo de devaluación, las tasas internas terminaban siendo efectivamente más bajas. Es así como se estimulaban varios efectos que permitían transitoriamente una situación más expansiva que en el resto de la región, con mayor estímulo al uso del crédito, salarios en ascenso, efecto riqueza por parte de los poseedores de activos financieros, ganancias extraordinarias en el sector inmobiliario o en la provisión de servicios. Mientras tanto, el precio relativo de los bienes industriales y agropecuarios perdió terreno, con lo que la capacidad de consumo se vio fortalecida. La evolución no era gratuita; fuera del campo de observación de las autoridades de la Eurozona, preocupadas por mantener la inflación de la región por debajo del 2% y evitar que la deuda pública de los miembros superase el 60%, se acumulaban tensiones de extrema gravedad. En especial, se destacaban los déficits abultados en las cuentas corrientes de los balances de pagos.

Suele entenderse que el umbral crítico de déficit en la cuenta corriente se sitúa en un entorno del 5% del PBI, más allá del cual la situación se torna muy compleja de sostener y puede desencadenar una profunda crisis del sector externo (Becker, 2008:7). Ese umbral no solo fue superado por varios países, sino que ya desde varios años antes de la crisis, algunos de ellos como Bulgaria, Estonia, Grecia, España, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Portugal y Rumania, así como Eslovaquia luego de ingresar a la Eurozona, tenían déficits sistemáticos superiores, excediendo incluso ocasionalmente el 20% del PBI. Como contracara de ello, varios otros países han registrado altísimos superávits, en una estructura sumamente polarizada.

Dichos déficits no eran más que un reflejo de groseros desequilibrios internos, en buena medida provocados por las alteraciones de las estructuras de precios relativos, fruto, a su vez, de una contradicción seria entre la regulación monetaria, la regulación salarial y la inserción en la división

¹⁰ En algunos países de Europa del este, aunque se mantuvieran monedas locales, buena parte de estos fenómenos se reprodujeron por medio de políticas monetarias que anclaban las monedas locales al euro.

regional del trabajo. Mientras la estructura industrial se desmoronaba, se incrementaba la demanda de consumo y las fuentes de especulación, sostenidas ambas con un crecimiento sideral de la deuda de las familias y las empresas, es decir, de la deuda privada y por lo tanto, no percibida como riesgosa por el *mainstream* de los economistas, quienes solo tomaban en cuenta la deuda pública. Tenemos allí, sin embargo a la “madre” de la crisis de la deuda.

SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE
En porcentaje del PBI

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Bélgica	3.5	2.6	2	1.7
Bulgaria	-5.5	-7.3	-5.6	-8.5	-6.6	-12.4	-17.8	-21.8
Rep. Checa	-4.8	-5.3	-5.6	-6.2	-5.3	-1.3	-2.6	-1.8
Dinamarca	1.4	3.1	2.5	3.4	3	4.3	2.9	0.5
Alemania	-1.7	0	2	1.9	4.7	5.2	6.1	7.6
Estonia	-5.3	-5.4	-9.8	-11.3	-11.7	-10	-16.7	-18.1
Irlanda	0	-0.6	-1	0	-0.6	-3.5	-3.6	-5.4
Grecia	-7.7	-7.2	-6.5	-6.6	-5.8	-7.5	-11.1	-14.2
España	-4	-3.9	-3.3	-3.5	-5.3	-7.4	-8.9	-10.1
Francia	1.2	1.7	1	0.4	0.6	-0.6	-0.7	-1.2
Italia	-0.5	-0.1	-0.8	-1.3	-0.9	-1.7	-2.6	-2.4
Chipre	-4.9	-3.2	-3.7	-2.3	-5	-5.9	-6.9	-11.7
Letonia	-4.8	-7.6	-6.6	-8.2	-12.9	-12.5	-22.5	-22.5
Lituania	-6	-4.7	-5.1	-6.8	-7.7	-7.1	-10.6	-14.6
Luxemburgo	10.5	8.1	11.8	11.0	10.4	9.8
Hungría	-8.4	-6	-7	-8	-8.6	-7.5	-7.6	-6.2
Malta	-12.4	-3.8	2.4	-3.1	-6	-8.8	-9.2	-6.4
Holanda	1.9	2.4	2.5	5.5	7.5	7.3	9.3	7.7
Austria	-2.6	-0.8	2.7	1.7	2.1	2	2.8	3.2
Polonia	-5.8	-2.8	-2.6	-2.1	-4	-1.2	-2.7	-4.7
Portugal	-10.4	-9.9	-8.1	-6.1	-7.6	-9.5	-10.1	-9.5
Rumania	-3.7	-5.5	-3.3	-5.5	-8.4	-8.6	-10.5	-13.5
Eslovenia	-2.7	0.2	1	-0.8	-2.6	-1.7	-2.5	-4.2
Eslovaquia	-3.5	-8.3	-7.9	-0.8	-3.4	-8.4	-8.2	-5.7
Finlandia	7.5	8.6	8.8	5.2	6.6	3.6	4.5	4.1
Suecia	4	4.3	5	7.2	6.7	6.9	8.4	8.5
G. Bretaña	-2.5	-2.1	-1.7	-1.6	-2.1	-2.6	-3.4	-2.8

Fuente: Elaboración propia en base a datos de European Economy, Statistical annex, spring 2010.

¿Pero quién financiaba “la fiesta”? Para comprender esto, hay que referirse a la otra subespecie del neoliberalismo, el “**neomercantilismo**”. Esta variante pone el acento en la intensificación de la capacidad de exportar como complemento a la esperada contracción del mercado interno gestada por las medidas que mejoran la rentabilidad del capital. La expectativa queda puesta, entonces, en la obtención de crecientes superávits comerciales, que sirven como indicador del éxito de la política. Dadas las condiciones generales de revaluación del euro, la política neomercantilista tiende a presionar especialmente sobre el mercado de trabajo, la inversión pública de largo plazo y los gastos sociales, con el objetivo de compensar la pérdida cambiaria de competitividad por medio de una caída en los costos laborales y tributarios. Dado que el mercado local importa cada vez menos, las caídas de las ventas internas pierden relevancia, aunque el resultado sea una pérdida de dinámica del crecimiento. Por eso, también, la inversión tiende a declinar a pesar de las crecientes ganancias, lo que libera fondos para financiar eventualmente a compradores externos o para dirigir a inversiones financieras o especulativas. El modelo más representativo del neomercantilismo es Alemania.

En principio, parecería que las dos vertientes del neoliberalismo son dos caras de una moneda, absolutamente simétricas y complementarias. Sin embargo, la acumulación de desequilibrios y deudas convierte a la articulación entre ambas en una bomba de tiempo, estrechamente dependiente de la dirección que tomen los actores y las políticas de los países acreedores. En ese marco, la coyuntura alemana, la potencia regional, resulta esencial para la dinámica general.

Una potencia rectora disfuncional

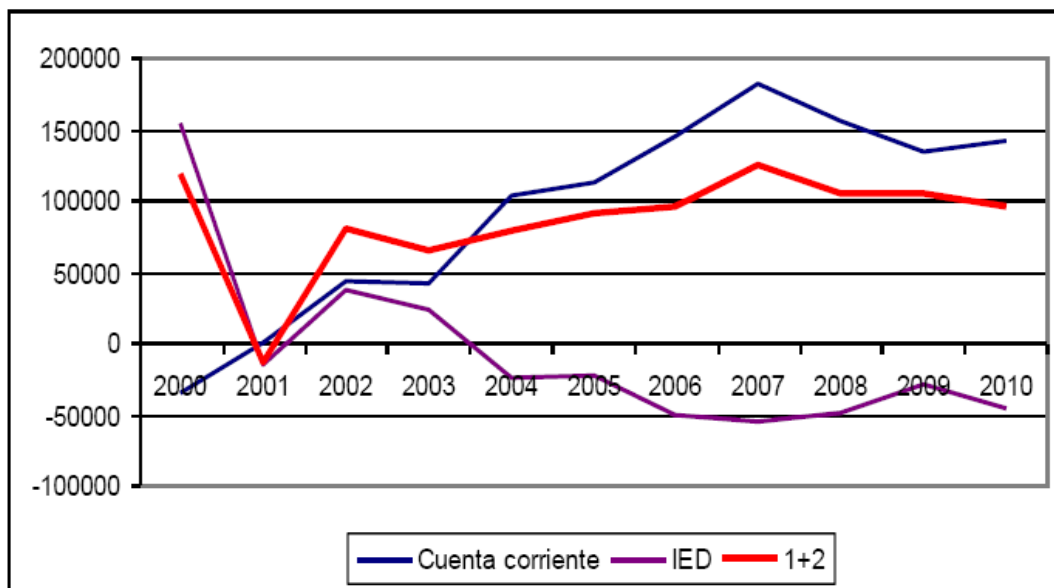
En las últimas dos décadas, Alemania se ha convertido en un *primus inter pares* de la Unión y ha adquirido las condiciones estratégicas para ejercer el liderazgo. La reunificación en 1990 desequilibró la relativa paridad con las otras economías grandes de la región, como Francia, Italia o Gran Bretaña. Señalaba Sukup (1993, 45-50) que esto suponía una transformación significativa para Europa que, pensada en base a un equilibrio entre los “grandes”, tenía ahora un país cuyo PBI superaba la sumatoria de la combinación de dos cualquiera de los otros, y sola representaba el 30% del comercio exterior de la CEE. La presión sobre el mercado laboral y las transformaciones tecnológicas reforzaron en los años siguientes la competitividad germana que, a pesar de la revaluación del euro, siguió avanzando sobre los mercados externos y ampliando su capacidad exportadora. La expansión que logró a partir de mediados de los 90 en los países del centro y este europeo, le confirió el carácter de vertebrador económico y político de la región centro-oriental. El desequilibrio entre Alemania y el resto del continente se plasmó también en el campo monetario, donde virtualmente se organizó primero una zona-marco, en la que la moneda alemana tenía el papel de referente central del SME, y luego se llevó a cabo una unión monetaria cuyas características se asemejaban mucho a la concepción del Deutsche Bundesbank, aunque

más rígida y con un objetivo antiinflacionario de mucha mayor radicalización, pues incluso el Bundesbank matizaba su control sobre los precios con las necesidades del ciclo económico de producción, inversión y empleo.¹¹ La influencia alemana procuraba menos proyectarse en las formas específicas del banco que en su papel de disciplinador político. Desde este punto de apoyo, terminó de configurar los mecanismos de ajustes de la región y buena parte de las características de funcionamiento de la economía europea en la primera década del milenio.

Pero en ese contexto, su primacía no logra ni busca conformar un liderazgo estable y expansivo. Por el contrario, la política alemana ha procurado por todos los medios sostener su expansión exportadora a caballo de un dumping salarial (Flassbeck, 2009) que consolide al país como el emplazamiento productivo más apropiado de la región. Pero entonces, si la política alemana tiene éxito, debería contribuir a una polarización creciente en los saldos de las transacciones externas, generando una situación inestable a largo plazo. Por un lado, un crecimiento de las exportaciones mientras se comprime el mercado interno implica un superávit comercial también en expansión, que resulta la contracara de déficits en progreso para los socios comerciales. En segundo lugar, si la presión por la focalización en el territorio de los emplazamientos productivos tiene éxito, significa una baja tasa de inversiones alemanas en el extranjero que restituyan parte de la liquidez internacional absorbida por el comercio exterior. En el grafico siguiente puede corroborarse claramente que tales fenómenos efectivamente son captados por las estadísticas, pues, en primer lugar, la proporción de las inversiones directas en el extranjero es muy reducida en comparación con las exportaciones.

INVERSIONES DIRECTAS DE ALEMANIA EN EL EXTRANJERO En millones de euros

¹¹ En realidad, esta diferencia resulta hasta lógica, pues el Bundesbank se insertaba en la lógica nacional alemana y, aún independiente, no podía desligarse por completo de la coyuntura. El BCE, en cambio, responde a una lógica mucho más técnico-burocrática, que hace gala de una independencia *in extremis*, desinteresándose de los fenómenos coyunturales reales. De allí que el euro sea más rígido incluso que el marco alemán.



Fuente: Deutsche Bundesbank

Ahora bien, si las exportaciones se expanden aceleradamente, el consumo interno se limita y las inversiones hacia el extranjero no fluyen de manera compensatoria, por fuerza tienen que polarizarse los flujos y los saldos de las cuentas externas con los principales socios. Los déficits que presentan los países más débiles no son, entonces, más que la otra cara de lo que ocurre en los países más fuertes y, especialmente en Alemania. El problema, sin embargo, no sólo afecta a los países más débiles, pues la misma lógica se le impone a otras potencias regionales como Francia, que sistemáticamente viene padeciendo déficits marcados con su principal partenaire y vecino. Así, surge la pregunta sobre la responsabilidad de tal polarización, así como del potencial de crisis que ella implica. Es indudable que por el tamaño de la economía alemana y su inserción externa, sus políticas ejercen una influencia asimétrica sobre la región. La asimetría se agranda aún más, pues Alemania tiene un grado menor de dependencia frente a la región europea y, en particular, de la Eurozona, que lo que ocurre en sentido inverso. La creciente inserción germana en otras regiones, como Rusia, China, o América latina la vuelve menos vulnerable a las fluctuaciones de la Eurozona que a los demás miembros. Por eso, en uno de los capítulos de la crisis griega y de la negativa inicial alemana a aprobar el paquete de ayuda, algunos analistas franceses insistían en que Alemania derivaba sus intereses cada vez más hacia el este, apartándose del “capitalismo renano”, poniendo en juego egoístamente a Europa y mostrando el fin de la utopía de un eje franco-alemán.¹² Uno de ellos, especialmente, destacaba que “Después de más de medio siglo de

¹² Le Figaro, 2/4/2010, <http://www.lefigaro.fr/editos/2010/04/03/01031-20100403ARTFIG00013-la-chronique-d-alexandre-adler-.php>; 9/4/2010, http://www.lexpress.fr/actualite/monde/l-allemande-a-flatte-le-courant-euroseptique_883240.html, así como las repercusiones en Alemania, Die Welt, 14/4/2010, <http://www.welt.de/politik/deutschland/article7179700/Franzosen-fuerchten-ein->

construcción comunitaria, asistimos a un profundo cambio de espíritu. Al instituir el euro, François Mitterrand apuntaba a una solución durable que consistía en disolver el poder del marco alemán en el euro. Fue lo inverso lo que se produjo: el euro se convirtió en el marco alemán. Eso no sería grave si el euro no se hubiera convertido en la nueva línea de clivaje en el seno de la Unión.”¹³

Podría entenderse entonces que en la polarización de flujos resulta mucho más influyente la política de austeridad competitiva de Alemania que las políticas más expansivas de los demás países europeos. En primer lugar, porque la asimetría de poder implica la imposición del modelo alemán y de sus pautas regresivas en el mercado laboral y en la seguridad social para evitar desequilibrios; una influencia en sentido inverso no puede sostenerse. En segundo término, los ciclos quedan determinados por la disponibilidad del capital financiero, alemán o externo, para financiar los desequilibrios comerciales que produce el ajuste sin fin de la competitividad alemana. Alemania descarga entonces sin contemplaciones su política sobre la Eurozona, evitando todo compromiso para sostener la liquidez del sistema a pesar de los desequilibrios. Sobre esa base, los capitales privados, en especial los financieros, han actuado de manera procíclica y, así como financiaron la expansión y las burbujas hasta 2007, tendieron a restar todavía más liquidez en la crisis y profundizaron su efecto regresivo.

El modelo económico que acompañó al euro entraña, como se ve, dificultades serias en sus mecanismos de regulación económica. A largo plazo, sin embargo, estos pueden moderarse con una regulación política explícita por parte de la potencia dominante, con capacidad para generar los mecanismos institucionales o informales para sostener una reproducción ampliada del sistema actuando sobre los desequilibrios de manera anticíclica. Tales mecanismos, sin embargo, están ausentes de la política alemana, como quedó claramente expresado en la crisis griega. Aunque la responsabilidad de los países superavitarios –especialmente de Alemania– es por lo menos tan grande como la de los deficitarios, aquellos se han desentendido de la regulación política, descargando la responsabilidad exclusiva y los ajustes sobre los segundos. En concreto, la regulación debería incorporar mecanismos coyunturales de provisión oficial de liquidez a través de préstamos públicos, regulación de los mercados para evitar los movimientos especulativos de corto plazo y formas de regulación monetaria diferentes a las procíclicas que supone el euro. A largo plazo, sin embargo, la política alemana debería abandonar el dumping salarial y procurar impulsar una política de desarrollo regional que permitiera estructuras económicas y sociales algo más homogéneas y evitara la divergencia entre las regiones y los países, pues allí está la clave para evitar el surgimiento periódico de crisis regionales.

deutsch-russisches-Europa.html, o [Euractiv](http://www.euractiv.de/wahlen-und-macht/artikel/deutschland-driftet-zum-ural-002953), 15/4/2010, <http://www.euractiv.de/wahlen-und-macht/artikel/deutschland-driftet-zum-ural-002953>.

¹³ [L'Express](http://www.lexpress.fr/actualite/monde/l-allemande-a-flatte-le-courant-eurosceptique), 9/4/2010, <http://www.lexpress.fr/actualite/monde/l-allemande-a-flatte-le-courant-eurosceptique> 883240.html.

Alemania, sin embargo, ha jugado un papel extremadamente negativo, pues con el argumento de que sus ciudadanos no deberían financiar los excesos de gastos de otros estados o de los ciudadanos de los países en crisis, sus funcionarios bregaron por un endurecimiento de las normas de la zona euro que habían conducido a la crisis. Ese endurecimiento significa un fortísimo ajuste a la manera del que se le impuso a Grecia o a España, con consecuencias depresivas, que inducirá la depresión y la caída de la recaudación y, por lo tanto una creciente carga de intereses. En esas condiciones, a los países deficitarios les será muy difícil equilibrar las cuentas fiscales. Por otra parte, con el mercado alemán comprimido, los desequilibrios comerciales no podrán ser superados. Las condiciones de la crisis europea permanecerán intactas y los ciclos europeos continuarán moviéndose al compás de los capitales financieros.

La forma que Alemania le imprime a su liderazgo podría calificarse en términos neogramscianos como una dominación sin hegemonía. Hegemonía es entendida en este contexto como una dominación donde sólo en ocasiones excepcionales es necesaria la utilización de la fuerza, pues la potencia dominante logra imponer que los países subalternos trabajen activamente y con convencimiento en pos del sostenimiento de la dominación, pues allí encuentran un espacio de crecimiento propio. No es este el caso, pues la dominación alemana supone e impone un proceso de ajuste permanente a partir de una violencia monetaria que le permite, combinando estabilidad de precios y reducción de costos, captar porciones crecientes del mercado y del valor creado en otros espacios nacionales de la región, pero ampliando a la vez los desequilibrios y cercenando los mecanismos por los cuales ese valor se transfiere sin generar resistencias o bloqueos desestructurantes. En ese sentido, el papel de Alemania a escala regional conserva una similitud muy grande con el que tuvieron los Estados Unidos en el período de entreguerras, con las mismas consecuencias desestabilizadoras en la etapa descendente del ciclo. Especialmente concordante es la (falta de) acción sobre la liquidez internacional. Al igual que los EEUU hacia finales de los años 20, Alemania tiene una balanza comercial superavitaria, pero genera recursos externos insuficientes para sostener la liquidez entre sus compradores. A largo plazo, entonces, el creciente endeudamiento de estos y las transferencias de servicios financieros y utilidades de las empresas alemanas radicadas en sus territorios acumula tensiones que explotan en la forma de crisis de endeudamiento, drásticas depresiones y graves perturbaciones en el balance de pagos. En ese punto, se suma también –al igual que en los 30- una deficiente gestión de la deuda (Deppe, 2011) El problema de la debacle actual es que, al igual que lo ocurrido con el crack del 29 a escala mundial, el derrumbe golpea también duramente a la propia Alemania, pues en ese contexto no había manera de evitar una dramática caída del comercio exterior, mientras la evidente incapacidad de pago de varios países endeudados y la contracción de las tasas de ganancia han impulsado una destrucción masiva de capital ficticio y una baja grande del valor del capital productivo. En los tres aspectos de la crisis, la potencia dominante regional fue afectada en primera línea. Pero además, el ahogo real o potencial de varios de los países de la Unión comienza a volverlos contra algunos de los pilares institucionales de la integración.

¿En el camino correcto?

En un artículo de un periódico alemán se recalca recientemente que “cuando los bancos hacen a propósito un mal negocio, algo debe estar descompuesto en el mercado financiero.”¹⁴ Bajo el título “vamos a la caja del miedo”, se narraba que varios bancos europeos aprovechan las bajísimas tasas de interés del 1% que les ofrece el BCE. Mientras colocan los fondos, los mantiene depositados allí mismo a una tasa del 0,25% en lugar de colocarlos en el mercado interbancario a tasas muy superiores al 1%, debido al temor a quiebras. El artículo apuntaba que pocos bancos se animan a prestarles dinero a otros. En ese marco, es necesario indagar sobre las reacciones que, frente a la crisis han tomado las autoridades nacionales o regionales.

La crisis tiene ya un recorrido temporal importante. Desde que se la reconociera en 2008 hasta la fecha, se han implementado numerosos paquetes y medidas para tratar de superarla. ¿Qué tan efectivos han sido? Buena parte de la respuesta a esta pregunta puede deducirse de las dos características básicas de los paquetes. En primer lugar, no ha habido respuestas colectivas consensuadas, sino políticas nacionales o programas impuestos cuando se trató de planes de “salvataje” a deudores en bancarota. Entre las opciones para enfrentar la crisis está ausente una transformación del proyecto de integración y una acción conjunta de sus miembros. En segundo término, se trata de medidas que se gestaron a partir de necesidades inmediatas y diagnósticos equivocados sobre el origen y las causas de la crisis.

En principio, la crisis tuvo un impacto diferente de acuerdo a la variante del modelo que cada país tenía en marcha. Así, por ejemplo, Alemania resultó mucho más afectada por la caída de la demanda externa, que amenazaba las exportaciones e introducía un factor recesivo. Para los países con déficit en la cuenta corriente, en cambio, la correa de transmisión principal fue la retracción en el flujo de capitales y el abrupto corte en la capacidad endeudarse. La recesión, en esos casos, provino del golpe sobre algunos servicios como el turismo o la construcción y, fundamentalmente, de los programas de ajuste derivados del cambio en las condiciones de los mercados financieros, que ahora obligaban a remitir fondos en lugar de atraerlos. En consecuencia, también las respuestas fueron diferenciadas, fenómeno potenciado por las diversas capacidades y autonomías de los estados para imponer políticas anticrisis. En principio, los países más poderosos, especialmente Alemania y Francia, adoptaron desde casi el inicio de la crisis un conjunto de medidas destinadas a sostener a las empresas en crisis por medio de subsidios, de mejoras en las condiciones de rentabilidad (lo que en muchos casos significó una mayor flexibilización del mercado de trabajo o una caída de los salarios y del empleo) y a ampliar el mercado mediante una mayor protección en lo interno, programas especiales como planes canje de automotores y una mayor agresividad en la conquista de mercados externos (cf., por ej., Dufrénot y Sand-Zantman, 2010).

¹⁴ “Ab in die Angstkasse” Süddeutsche Zeitung, 5-6 de marzo de 2012.

Para los países fuertemente endeudados, en cambio, el curso de acción fue impuesto por los acreedores, pues la debilidad y dependencia les reducía considerablemente el margen de autonomía. Pero además, a diferencia de lo que ocurre con las potencias mayores, el nudo gordiano de sus crisis se encuentra en el sector externo, formalmente visualizado en los déficit de las cuentas corrientes, pero atado a la relación asimétrica con las grandes potencias.¹⁵ En este caso, la primera frente a la crisis consistió en garantizarle al sector financiero la rápida fuga de recursos hacia las casas matrices. Ese proceso se materializó en el crecimiento de las deudas públicas, que fueron asumiendo los compromisos privados y aportando con la toma de créditos los recursos que el sector financiero necesitaba para la fuga hacia los países centrales, que eran a la vez acreedores y oferentes de esos fondos. Por lo tanto, la asistencia que recibieron los países deudores era, en realidad, recursos de los países centrales para sus bancos en el extranjero, trianguladas por los estados de los países endeudados, que internalizaban esos fondos como endeudamiento. En última instancia, los países acreedores impulsaban programas de asistencia para su sector financiero, buscando evitar un colapso que los afectara internamente. Como contrapartida, sin embargo, los sucesivos programas de ayuda impulsados tanto por los países acreedores como los organismos internacionales (la Unión Europea, el fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial) exigieron un fuerte ajuste fiscal que garantizara la capacidad de repago. En general, el mix consiste en un fuerte recorte de gastos corrientes y no corrientes (reducción de inversiones, rebajas de salarios públicos, jubilaciones y pensiones, despido de personal), incrementos de los impuestos indirectos (es decir, aquellos que no afecten la rentabilidad empresarial), medidas estructurales (en especial flexibilización laboral y elevación de las edades jubilatorias) y programas de privatizaciones de las empresas públicas. En el fondo, una drástica compresión del consumo popular, de las condiciones de vida y de la capacidad de la asistencia social de los estados.

En primera instancia, estos programas fueron regenteados por el FMI y se aplicaron en varios de los países del Este, pero la profundización de los problemas y la generalización hacia países más grandes como Grecia, Portugal, Irlanda y, sobre todo, España e Italia, obligaron a profundizar los programas, que son monitoreados también por la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Los programas mantienen de manera radical los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento –radicalizados en el nuevo Pacto Fiscal–, el temor a la inflación como eje principal, la idea de que la crisis se origina en la indisciplina fiscal (algo que las estadísticas de la mayor parte de los países desmiente) y, por lo tanto, la descarga del ajuste sobre los países deficitarios, sin tomar en cuenta las dos caras del desequilibrio y la

¹⁵ Este aspecto forma parte de una polémica sobre la interpretación heterodoxa de la crisis, uno de cuyos polos enfatiza la cuestión de la distribución del ingreso (cf., por ej., Onaran, 2012), mientras otra posición (que compartimos para el análisis de los países del sur y del este europeo) considera los problemas externos como el aspecto más relevante (cf., por ej. Lapavistas et Al, 2011). Ver también Becker (2012). En Musacchio (2012) planteamos la idea de interpretar los diferentes niveles de la crisis, sus aspectos nacionales y su dinámica internacional como articulación de los problemas específicos.

necesidad de un ajuste también en los países superavitarios, como bien había advertido ya Keynes en la coyuntura crítica de la inmediata Segunda Posguerra. El fracaso de tales políticas se manifiesta en la perennidad de la crisis, que a cinco años de su estallido se mantiene inmovible. En el mejor de los casos, los ajustes cortan una y otra vez las pequeñas recuperaciones y mantienen latente una depresión generalizada.

Pero tanto las características del modelo neoliberal como las formas que predominaron hasta ahora en el enfrentamiento de la crisis se entrelazan fuertemente con el largo plazo. En ese sentido, la crisis es mucho más profunda que una simple crisis económica y su potencial destructivo alcanza a los niveles más profundos de las sociedades europeas. Tiene, por lo tanto un impacto en los planos social, político y estructural, cuya magnitud es preciso analizar de manera consistente. Veamos de manera sucinta algunos de estos problemas.

Algunas consecuencias de largo plazo

El plano social

Desde el punto de vista social, como vimos, tanto la lógica de los modelos neoliberales como las estrategias anticrisis descargaron de manera sistemática el peso de los ajustes sobre el sector laboral. La dinámica de recuperación de las tasas de ganancia luego de la crisis del fordismo produjo una combinación de transformaciones tecnológicas y de cambios en la organización de los procesos productivos que incrementaron la productividad por medio de una mayor intensidad del trabajo, generando además un aumento de la desocupación y un desacople entre los espacios de acumulación de los grandes conglomerados empresariales y los espacios de las convenciones colectivas del trabajo. Por lo tanto, se advirtió desde mediados de los años 80 un debilitamiento de la clase obrera como actor colectivo, agravado con la liberalización de los flujos de capital primero, con la caída de los regímenes socialistas luego y, finalmente, con la incorporación de los países del Este al proceso de integración europeo (cf. Musacchio, 2012b).

Especialmente nocivo fue el desacople entre los espacios de la acumulación y de las relaciones laborales, pues ha puesto en competencia directa a los colectivos de trabajadores. El creciente riesgo de desplazamiento de las inversiones obliga a los trabajadores a aceptar una mayor flexibilización con una menor paga, en un espiral de reducción de los estándares laborales. Al fortalecerse esa dirección, las características del modelo neoliberal provocaron que el proceso de integración se alejara cada vez más de la idea inicial de una Europa de altos estándares y de reglas comunes en la competencia económica. Por el contrario, forzaron una competencia entre normas y estándares nacionales, buscando mejorar las chances de cada espacio de localización con la precarización y la reducción de costos del trabajo (cf., por

ej., Hufschmid, 2009:112-113). Ese camino reduce la posibilidad de coordinar una cooperación intergubernamental y, por lo tanto, disminuye la posibilidad de una política de integración consistente. Se genera entonces un campo de tensión al interior de los estados, que deben optar por mantener firmes sus estándares y, por lo tanto, procurar sostener barreras a la competencia, o, por el contrario, fortalecer la competencia desmantelando el Estado de bienestar, flexibilizando el proceso de trabajo y modificando regresivamente la estructura tributaria, camino que en los últimos años ha predominado claramente.

De esa forma, comenzó a manifestarse una creciente dualización de las sociedades nacionales, en un doble sentido. Por un lado la asimetría entre las potencias y los países subdesarrollados ha incrementado la brecha entre países ricos y países pobres, intensificando la transferencia de riqueza desde segundos hacia los primeros. Las políticas para enfrentar la crisis estimularon aún más el proceso, alejando el objetivo de convergencia de los niveles de vida dentro de la UE (cf. Musacchio 2012). A esta instancia se le suma la creciente dualización interna dentro de los espacios nacionales, que afecta de manera transversal a todos los países de la Unión. La fragmentación resulta cada vez más perceptible y se derrama sobre grupos minoritarios, regiones internas de cada país, sectores desocupados, etc. Quien recorre el cordón oriental de los países del Este recién incorporados a la UE se encuentra con un panorama muy diferente y bastante más desalentador que las hermosamente reconstruidas capitales, situadas en el extremo occidental. Una creciente ola de xenofobia, generalmente dirigida hacia grupos específicos y diferentes en cada país (como latinoamericanos en España, magrebíes en Francia, o gitanos en Europa oriental) contempla variantes cada vez más radicales, que han incluido ya el llamado a “soluciones finales” por parte de partidos de ultraderecha, como en el caso de República Checa frente a los gitanos.¹⁶ Con la desocupación situada en el nivel más alto en varios lustros, los desocupados de larga data o que cuentan con bajos niveles de instrucción sufren una lenta pero perceptible desconexión social, incluso en los países de mayor nivel de desarrollo relativo. También en ellos, y mucho más en el resto de las naciones de la región, la polarización del ingreso genera categorías y estándares sociales diferenciados al interior de cada país.

La profundización de estas brechas se hace todavía más marcada en la medida en que algunos mecanismos compensadores que formaban parte del Estado de bienestar han sido sistemáticamente recortados en las últimas dos décadas por razones fiscales, en el marco de un cambio de paradigma desde lo que dio en llamarse el *Estado de Bienestar asistencialista* hacia el *Estado de Bienestar activador*. El Estado activador, en línea con los postulados de la “tercera ola”, apunta a combinar una mayor apertura de las políticas sociales a la lógica del mercado con el impulso al trabajo como “estado natural”,

¹⁶ La propuesta tuvo en mayo de 2009 una gran repercusión en los medios de comunicación. Como ejemplo, cf.

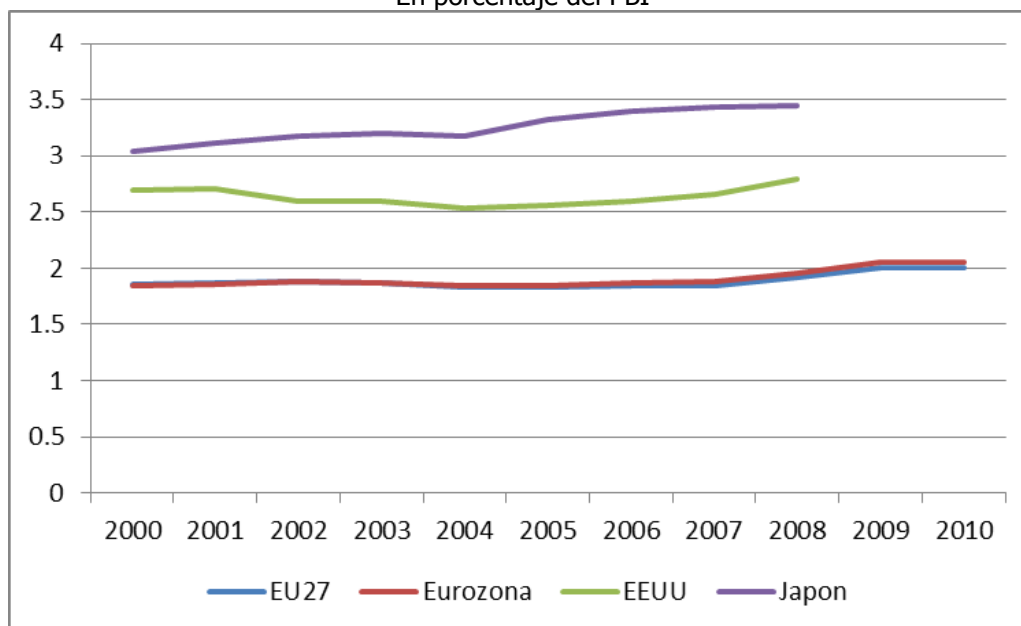
<http://www.dailymail.co.uk/news/article-1186400/Czech-far-right-party-linked-BNP-runs-Euro-election-TV-ads-demanding-Final-Solution-gypsy-problem.html>

con la idea de un paulatino remplazo del “welfare state” por el “Workfare state” (cf., por ej., Lessenich, 2012). Por eso, aunque las estadísticas no revelan una reducción sustancial de fondos –en especial en países como Francia o Alemania (cf., por ej. Theret 2007, Schmid, 2005)– se observan un conjunto de transformaciones que, junto con el debilitamiento de la relación trabajadores activos/receptores de asistencia social (Bieling, 2008:30), muestran un deterioro de las prestaciones, un proceso de creciente burocratización eficientista, que contrasta con la orientación decomodificadora del pasado, y una privatización parcial de los sistemas. El deterioro se complementa con una limitación temporal de algunas prestaciones, como los subsidios al desempleo, la vinculación forzosa de parte del financiamiento a una utilización preprogramada, la limitación de las coberturas médicas, el recorte de recursos para la educación pública o el aumento de la edad jubilatoria. Aun manteniéndose una disparidad muy fuerte en las modalidades y los desembolsos, se encuentra en marcha una reforma regresiva desde mediados de los 90, que los programas de ajuste para enfrentar la crisis no han hecho más que agravar.

De especial importancia por su incidencia sobre la estructura social de largo plazo – pues articula de una manera directa el presente con el futuro menos inmediato– es la transformación del sistema educativo. Se observan en ese terreno dos problemas diferentes, aunque no independientes entre sí, que también conllevan una carga diferenciada en sus efectos. El más inmediato es el creciente recorte de fondos, derivados de los ajustes presupuestarios y que, por lo tanto, se hacen más evidentes en los países más rezagados. Sin embargo, más complejas son algunas reformas estructurales, que apuntan a unificar las pautas regionales y a amalgamarlas a otros modelos, en especial a los Estados Unidos. La reforma de las currícula universitarias, con la introducción de las figuras del *bachelor* y el *master*, por ejemplo, generaron un híbrido que afecta las ventajas del viejo sistema sin lograr las del nuevo. Tal reforma, sin embargo, debe ser vista en el contexto de una transformación que apunta a una mayor formación técnica (con el fortalecimiento de las escuelas terciarias por sobre la universidad), una mayor movilidad de los docentes e investigadores a partir de puestos de trabajo limitados temporalmente (con gran deterioro en la formación de grupos de trabajo y de discípulos) y un creciente peso de las instituciones privadas en el sistema, que se nutren de la pérdida de recursos y calidad del sistema público. La creciente mercantilización permite la conformación de un sistema de calidad superior para quienes pueden financiarlo, paralelo al deterioro del resto del sistema, originando otra dualización que apuntala la formación de pequeñas élites provenientes de los sectores de más altos recursos, llamados a conformar luego los cuadros superiores de los sectores dirigentes (políticos, económicos y burocráticos).

Un indicador significativo de varias de estas tendencias es el de los recursos destinados a investigación y desarrollo, pues la Unión Europea lo ha reconocido como el instrumento clave en la mejora de la competitividad y de la competencia frente a otras regiones (cf. Musacchio, 2002). Se advierte allí que a pesar de una compleja trama de programas, los recursos no han logrado incrementarse y se mantienen muy por detrás de los competidores directos, los Estados Unidos y Japón.

RECURSOS DESTINADOS A INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO En porcentaje del PBI



Fuente: Eurostat

Un desagregado por países muestra una gran dispersión entre ellos y la existencia de un bloque con un fuerte liderazgo, encabezados por Suecia y Finlandia (con un nivel superior a Japón), con Alemania, Austria y Dinamarca en niveles cercanos a los norteamericanos y bastante más retrasado Francia. Entre ellos, por volumen de PBI resulta relevante especialmente Alemania. El resto de la región tiene una participación notablemente menor, confirmando también desde esta perspectiva la clara articulación de un esquema de desarrollo/subdesarrollo en la región. Por otra parte, el estímulo a la acción privada coloca a los grandes consorcios multinacionales en la cúspide del proceso de I&D.

Las crecientes disparidades sociales, cualquiera sea el indicador que tomemos, son un motivo central de una creciente ola de protestas, como los que se plasmaron, por ejemplo, con el movimiento de indignados en España, las masivas manifestaciones de repudio a los ajustes en Grecia, pero también las violentas protestas en Londres. El fenómeno, sin embargo, no es nuevo, pues entronca con algunos conflictos previos a la crisis, como el estallido social de las banlieu parisinas en 2005 y da cuenta de una crisis política muy profunda.

La crisis política y los golpes a la democracia

La extensión de la protesta social es, sin dudas, la contracara de otro fenómeno de largo plazo que se plasma en la región, precisamente en un campo donde Europa se había convertido en un espejo desde la postguerra. Desde la imposición del modelo neoliberal se observa una paulatina limitación de las libertades individuales y, sobre todo, de la calidad del proceso democrático, tendencia que en la última

década ha tendido a profundizarse. El fenómeno se nutre de uno de los quiebres más notorios frente al modelo de la posguerra. Barry Eichengreen (1999:17) destaca provocativamente que por entonces, la defensa de los mercados internos se sostuvo limitando la movilidad de capitales, medio por el que se remplazaba las anteriores restricciones democráticas. La hipótesis resulta plausible, pues la dificultad para retirar inversiones obligaba a los empresarios a una negociación compleja, que sumaba a los sindicatos a la conformación de las estructuras políticas sobre las que luego se extendía la participación más general de los ciudadanos. Eichengreen es mucho más críptico cuando se refiere al período posterior a la crisis de los 70, señalando que con la creciente movilidad del capital y el mantenimiento de una democracia sin restricciones, el sostenimiento de tipos de cambio fijos se fue tornando cada vez más problemático. De allí, podría interpretarse que la opción de una estabilidad monetaria y cambiaria como la impulsada por las instituciones europeas, en conjunción con una absoluta movilidad del capital, sólo es posible con una creciente limitación democrática, asociada a las diferentes capacidades de acceso, presión o influencia ideológica de los distintos grupos sociales.

A más tardar a partir del establecimiento de la unión monetaria se hizo presente la tensión entre, por un lado, una reforma política del proceso de integración, que estableciera las bases para avanzar hacia un Estado europeo que sintetizara las corrientes políticas y sociales de la región y dotara a las instituciones de un contenido democrático y con poder de decisión, y por el otro, la presión para imponer un proyecto mucho más vinculado a los intereses económicos de los grandes grupos empresarios, que apuntara a un disciplinamiento establecido por el mercado. Tal confrontación sobrevoló las últimas cumbres del Siglo XX. Entre Maastricht y Amsterdam se consolidó el segundo camino, pero también creó las condiciones para una crisis política latente, sostenida por varios problemas simultáneos:

a) la evolución económica de la UE fue tomando un rumbo conflictivo, que combinó alto desempleo, bajo crecimiento, desarme parcial de los estados de bienestar y polarización del ingreso; desde 1986, la integración no pudo concretar los efectos de bienestar prometidos por documentos como el Informe Cecchini, sino que, por el contrario, contribuyeron a enterrar los sistemas nacionales de regulación y alejaron a las elites políticas europeas de la población (Beckmann et Al., 2006:313);

b) se concretó una línea divisoria muy difusa entre las competencias de los estados nacionales y las instituciones regionales; si bien algunas competencias institucionales quedaron firmemente establecidas, otras tendieron a solaparse, como los incentivos al desarrollo industrial o el ordenamiento de la I&D, sosteniendo la competencia entre los estados nacionales y entre estos y la Unión. Asimismo, las diferencias en el poder de influencia de cada estado sobre las instituciones europeas consolidaron una jerarquía diferenciada en la capacidad de maniobra política en el seno de la UE

c) una creciente falta de legitimación democrática de las instituciones regionales originada en la supremacía de los lineamientos económicos, la falta de competencias de los organismos elegidos

directamente –el Parlamento Europeo-, la repetición de elecciones ante resultados negativos, la baja participación general de los ciudadanos en las elecciones regionales y la falta de transparencia en las negociaciones y normativas regionales. El problema no fue resuelto con las reformas cosméticas realizadas en los últimos años, pues la esencia no fue alterada, especialmente en Lisboa II.

Si ese alejamiento es clave para entender el giro de la política europea a comienzos del milenio, cuando varios de los gobiernos de corte socialdemócrata que habían compuesto la “tercera vía” en los 90 fueron derrotados electoralmente, sus reemplazantes, junto con una nueva Comisión conformada a partir de la expansión hacia el Este (donde también ocurría un cambio político similar), reforzaron el rumbo neoliberal, radicalizando las políticas orientadas a la competitividad global.

En ese contexto, el proyecto más significativo para romper la inercia de crisis fue el intento de sancionar una constitución regional. Esto podía tomarse como un camino para reconstruir la confianza perdida en la integración (Wehr, 2004:17), especialmente luego del golpe que significó el segundo rechazo de la población danesa a incorporarse a la Eurozona en el 2000. Además, la incorporación de los países del Este, por su cantidad, por tradiciones diferentes y por una inserción externa no siempre en línea con los viejos miembros de la Unión suponía un desafío institucional para adaptar la normativa existente. El texto elaborado, sin embargo, no avanzaba demasiado con respecto a los tratados existentes y su corazón consistía en darle rango constitucional a las políticas económicas neoliberales, incorporando de manera explícita los objetivos y los mecanismos que habían ido construyéndose primero con el Acta Única Europea, Luego con el Tratado de Maastricht, el de Lisboa, el de Ámsterdam y finalmente el de Niza en 2001 (cf. Convención Europea, 2003). Se trataba de un encadenamiento del rumbo de la UE a la dirección tomada en los 90, no solo por sus objetivos generales, sino también por los instrumentos de política económica, que quedaban fijados y acotados por la Constitución. Ese fue, posiblemente, uno de los puntos sin retorno de la crisis europea. La constitución no pudo ser refrendada luego de los estrepitosos fracasos en los plebiscitos de Francia y Holanda en 2005 y, contrariamente a los procedimientos habituales, los referenda restantes, especialmente el británico, fueron suspendidos por tiempo indeterminado y el tema confinado a un piadoso olvido. No así las ideas, que se reciclaron en el nuevo Tratado de Lisboa firmado en 2007, vigente desde 2009. Sin rango constitucional ni consenso, la orientación neoliberal y sus políticas se sostuvieron de una manera cada vez más cuestionable.

Otra causa de la creciente falta de legitimidad política de las instituciones europeas se origina en las características de los mecanismos de regulación que acompañaron el incremento de sus responsabilidades. Scharpf (1999) recalca que las normativas europeas han fortalecido la faz negativa de la integración (centrada en la eliminación de barreras), frente a la faz positiva (que apunta a modelar las estructuras y los mercados con políticas activas), la cual queda centrada en los Estados nacionales y depende de los acuerdos intergubernamentales. Sucesivas reformas acrecentaron la asimetría entre uno y otro tipo de instancias, con la prevalencia de la faz negativa. En ese marco, cobra relevancia la

imposición del rumbo determinado por la integración, dirigido a fortalecer la competitividad y asociando esta última a la concentración del capital para que las grandes empresas ganen en masa crítica frente a sus rivales externos. Al fortalecerse esa dirección, la integración negativa también golpea sobre la idea de la Europa de altos estándares y de reglas comunes. La crisis afianzó aún más este enfoque.

El predominio de la búsqueda del equilibrio fiscal, la restricción monetaria y la mejora en la competitividad desmantelando estándares laborales se plasmó en los sucesivos acuerdos institucionales y propuestas, como “Europa 2020”, la propuesta Rompuy, el Mecanismo de Estabilidad Europeo, el “Euro-plus” o el Pacto fiscal. Las directrices de la Comisión Europea apuntan a lograr un equilibrio en las cuentas fiscales por medio de reducciones en los gastos que implican profundos recortes sociales, un incremento de la productividad -nuevamente- por la vía de mayor flexibilización y un control y monitoreo permanente por parte de las autoridades regionales para velar por el cumplimiento de tales objetivos.¹⁷ Se impone, pues, una lógica externa a la voluntad de las comunidades nacionales. Los ciudadanos europeos se ven privados de buena parte de su capacidad de elección, pues el núcleo central de las políticas internas queda bajo la tutela de un conjunto de burócratas, cuyas directrices no son sometidas a discusión alguna. El paso de las macrodecisiones a la vida cotidiana puede verse sin tapujos en varios ejemplos. Los programas de salvataje de los países endeudados, por ejemplo, contienen condicionamientos inaceptables para la mayoría de la población, que tampoco pudo fiscalizar la contratación de las abultadas deudas. Pero probablemente el ejemplo más claro fue el de Grecia a fines de 2011, cuando el Primer Ministro Papandreu intentó someter a un referéndum el acuerdo firmado para el “rescate”, actitud considerada inaceptable por sus pares de Alemania y Francia, así como por las autoridades regionales. La consecuencia fue la dimisión de Papanderu, la aceptación directa de las condiciones de acuerdo y el inicio de un proceso de inestabilidad política cerrado sólo recientemente, aunque probablemente sólo de manera provisoria, con la asunción de un nuevo gobierno que mantiene el rumbo fijado por la Troika (cf. Kouvelakis, 2011). También el monitoreo al que accedió a ser sometida España en el último plan de rescate/ajuste sigue la misma tónica, incluso cuando el Ministro de Finanzas sea insospechable para la Troika, dado su pasado como directivo de Lehman Bros. Una presencia que no es curiosa, pues varios funcionarios nacionales en diferentes países tienen un pasado vinculado al establishment europeo o financiero, como el ex primer ministro griego Papademos -antes vicepresidente del Banco Central Europeo-, o Mario Monti, Premier italiano y ex Comisionado europeo.

En esas condiciones, resulta imposible de evitar un clima político cada vez más tenso. La resistencia activa de los afectados se torna cada vez más violenta. Mientras tanto, los estados introducen

¹⁷ Para los textos de los acuerdos y las orientaciones generales, ver las páginas electrónicas de la Comisión, en especial http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/index_en.htm. Para un análisis detallado del impacto político, cf. por ej., Urban (2011).

normativas cada vez más represivas, entre las que se destaca por su crudeza y su apartamiento de un conjunto de tradiciones de la región el caso de España, a partir de las reformas al código penal y las medidas de control a los ciudadanos que incluyen la creación de un Centro Nacional de Inteligencia destinado al espionaje civil. La falta de alternativas del sistema, por su parte, impulsa lento pero ya perceptible crecimiento de partidos de ultraderecha, en especial en la región oriental del ex bloque socialista, pero que de a poco llega también al centro de la región, tal como quedó demostrado con el masivo avance del Frente Nacional de Le Pen en Francia. O de alternativas absolutamente externas al sistema como el Partido Pirata alemán, de sorprendente performance en las recientes elecciones locales de Berlín. Como sea, la crisis financiera y la crisis económica se superponen con una crisis política de una profundidad al menos similar, que coloca al sistema político europeo –y no sólo las instituciones emergentes del proceso de integración- en su conjunto en un grado peligroso de descomposición, signo inequívoco de una declinación mucho más profunda de lo que suele admitirse.

Conclusión: Una Europa acosada por serios problemas estructurales

La crisis europea, presentada como un colapso de endeudamiento debido a algunos gobiernos demasiado dispendiosos, descubre, en realidad, los límites y las contradicciones del modelo neoliberal. El proceso de distribución regresiva del ingreso limita la capacidad de expansión de la producción y libera recursos para la especulación. Los nuevos mecanismos de regulación desbocan al sector financiero, colocan en jaque a la economía real y fuerzan una competencia por la localización de inversiones que arrasa con las condiciones de trabajo y profundiza la distribución regresiva. Los superávits comerciales de los países centrales (derivados de la contracción de los salarios y la competencia por la localización) y el excedente de liquidez impulsan el endeudamiento privado, motorizando aún más la especulación. La política restrictiva del Banco Central Europeo y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento terminan de cerrar el cuadro regresivo que permiten encontrar a la crisis internacional un polvorín presto a estallar. Las consecuencias de largo plazo de tal panorama, tamizados por la radicalización de los lineamientos neoliberales, agudiza las contradicciones, e impulsa la concentración económica, social y geográfica hasta niveles intolerables. Por eso, la resistencia social se hace también cada vez más radical, desnudando la falta de respuestas del sistema político. También resulta difícil de sostener un proceso de integración que apunta a fortalecer el modelo que se agota.

Pero además, los recortes presupuestarios y el proceso de privatizaciones dañan tejidos clave para el sostenimiento de la sociedad europea en su conjunto en un lugar de privilegio. Por eso, la crisis envía señales serias y persistentes de una declinación de la región. La opción de salida será, sin dudas, un profundo replanteo de las bases de la integración, en sintonía con la configuración de un nuevo modelo económico y social. En el camino, sin embargo, se recortan algunas piedras adicionales, muy difíciles de

apartar. En primer lugar, el giro necesita una constelación social diferente en el poder. Sin embargo, el sector dominante ha tendido a consolidarse y su estrategia se desliga cada vez más del escenario exclusivamente regional. Esto puede visualizarse, por ejemplo, en las estrategias de salida de la crisis planteadas por el principal lobby regional, la "European Round Table of Industrialists", cada vez más orientada hacia una lógica interregional, con creciente inserción en Asia y una profundización de la liberalización y la flexibilización laboral (cf. ERT, 2012).

La segunda piedra estructural es el notorio envejecimiento de la población, con una reducción de la relación PEA/población total que implicará, seguramente, profundas transformaciones en el sistema de jubilaciones y pensiones, con gran impacto sobre el conjunto de la estructura social. El problema resulta mucho más complejo de resolver en el marco de la flexibilización laboral, de la reducción del salario, de una tributación basada en impuestos indirectos y de la creciente incidencia de un sistema privado del tipo capitalización, pues el conjunto reduce la base de aportes, la población empleada y quiebra la solidaridad. Una importante porción de la población queda, así, a un paso de la exclusión.

Por último, aparecen interrogantes sobre la sustentabilidad ambiental del crecimiento, pues el impacto sobre la extracción de recursos y la producción de residuos se encuentra en Europa en un límite de difícil perforación. Un proceso expansivo tendría, *caeteris paribus*, graves consecuencias en la sustentabilidad del medio ambiente. Es por eso que algunos analistas proponen vías de recuperación que implican un crecimiento mucho más acotado y, por el contrario, una distribución mucho más equitativa del ingreso (cf. Altvater_Mahnkopf, 2002). La ruptura de las políticas en curso y la imposición de una nueva estrategia superadora, que transforme las características del proceso de integración se torna, así un ejercicio político, social e intelectual de extremada complejidad, aun cuando imposible de eludir.

Bibliografía

Aglietta, Michel (2000), Ein neues Akkumulationsregime. Die Regulationstheorie auf dem Prüfstand, Hamburgo.

Altwater, Elmar y Mahnkopf, Birgit (2008), La globalización de la inseguridad. Trabajo en negro, dinero sucio y política informal, Lanús.

Becker, Joachim (2004), "EU constitution, dependent development and the centre-periphery debate", en Janusz Tomidajewicz (Ed.), A new-all-European development model in an enlarged EU. Social and economic aspects, Poznan.

Becker, Joachim (2008), "Der Drang nach Osten. Wirtschaftliche Interessen und geopolitische Strategien", en Kurswechsel 4/2008, Viena.

Becker, Joachim (2012), "Die Linke und die Euro-Zone", en Kurswechsel 1/12, marzo.

Beckmann, Martin, Deppe, Frank y Heinrich Mathis (2006), "In schlechter Verfassung? Ursachen und Konsequenzen der EU-Verfassungskrise", en PROKLA Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft, Heft 144 Nr 3.

Bieling, Hans Jürgen (2003), "Die neue europäische Ökonomie: Transnationale Machtstrukturen und Regulationsformen", en Beckmann, Martin, Bieling, Hans Jürgen y Deppe, Frank (Eds.), „Eurokapitalismus“ und globale politische Ökonomie, Hamburgo.

Bieling, Hans Jürgen (2008), "Gesellschaftlicher und Oekonomischer Strukturwandel in Europa", en Busch, Klaus, Wandel des Wohlfahrtsstaats in Europa, Wiesbaden.

Bieling, Hans Jürgen y Steinhilber, Jochen (2000) "Hegemoniale Projekte im Prozess der europäischen Integration", en Bieling, Hans y Jochen Steinhilber (Eds.), Die Konfiguration Europas. Dimensionen einer kritischen Integrationstheorie, Münster.

Convención Europea (2003), Proyecto de Constitución de la Unión Europea, <http://european-convention.eu.int>, 18/7/2003

Davies, Stephen y Lyons, Bruce (2007), Mergers and Merges remedies in the EU. Assessing the consequences for competition. Reporte de la Comisión Europea, Cheltenham.

Deppe, Frank (2000) "Zum Wandel kritischer Integrationstheorie", en Bieling, Hans y Jochen Steinhilber (Eds.), Die Konfiguration Europas. Dimensionen einer kritischen Integrationstheorie, Münster.

Deppe, Frank (2011), "Der Weg in die Sackgasse", en Bischoff, J., Deppe, F. Detje, R y Urban, H-J, Europa im Schlepptau der Finanzmärkte, Hamburgo.

Dufrénot, Gilles y Sand-Zantman, Alain (2010), Après la crise? Politiques économiques dans le monde, París.

Eichengreen, Barry (1999), Vom Goldstandard zum Euro. Die Geschichte des internationalen Währungssystems, Berlin.

European Economy (2010), "The Economic Adjustment Programme for Greece", Occasional Papers 61, mayo.

European Round Table of Industrialists (2012), Creating Growth in Europe, <http://www.ert.eu/sites/default/files/2012%20January%20-%20ERT%20Statement%20on%20Creating%20Growth%20in%20Europe.pdf>, enero.

Flassbeck, Heiner (2009), Gescheitert. Warum die Politik vor der Wirtschaft kapituliert, Munich.

Fondo Monetario Internacional (2010), "Zona del euro: Restablecer la confianza es clave para el crecimiento", Boletín Digital del FMI, 21 de julio.

Huffschnid, Jörg (2002), Politische Ökonomie der Finanzmärkte, Hamburgo.

Huffschnid, Jörg (Ed.) (2005), Economic policy for a social Europe: a critique of neoliberalism and proposals for alternatives, Londres.

Huffschnid, Jörg (2009), „Europäische Perspektiven im Kampf gegen die Wirtschafts- und Finanzkrise“, en Altwater, Elmar et al. (Eds), Krisen Analysen, Hamburgo.

Karras, Anne (2009), Die EU und der Rückzug des Staates. Eine Genealogie der Neoliberalisierung der europäischen Integration, Bielefeld.

Kouvelakis, Stathis (2011), “El crisol griego”, en New Left Review 72, noviembre-diciembre.

Lapavistas, Costas et al. (2011), “ Breaking Up ? A Route out of the Eurozone Crisis”. 3ird Occasional RMF Report on the Eurozone Crisis, November.

Lessenich, Stephan (2012), “Aktivierender Sozialstaat: Eine politisch-soziologische Zwischenbilanz”, en Bispinck, Reinhardt et al., Sozialpolitik und Sozialstaat, Wiesbaden.

Musacchio, Andrés (2002), “La política industrial europea: evolución, balance y perspectivas”, en Informe Económico IMA N° XII, septiembre.

Musacchio, Andrés (2008), “Riesgos y beneficios de una integración monetaria en el Mercosur: reflexiones a la luz de la experiencia europea” Ciclos en la Historia, la Economía y la Sociedad N° 33-34, segundo semestre.

Musacchio, Andrés (2012b), “Las transformaciones en la integración europea y su impacto sobre la acción sindical: tendencias y debates en las últimas tres décadas”, en Ciclos en la Historia, la Economía y la Sociedad N° 39-40, primer semestre.

Musacchio, Andrés (2012), „Umstrukturierung der Verschuldung und Wachstumsbedingungen: Griechenland und Argentinien im Vergleich“, Prokla Nr. 168, en prensa.

Onaran, Özlem (2012), “An internationalist transitional programme as an answer to the Euro crisis”, en Kurswechsel 1/12, marzo.

Gemeinschaft, Colonia.

Scharpf, Fritz (1999), “Negative and positive integration in the political economy of European welfare states”, en Rhodes, Martin y Meny, Yves (Eds), The future of European welfare. A new social contract?, Suffolk.

Schmid, Josef (2005), «Sozialstaatsmodelle in der EU –Vielfalt und Wandel», en Faerber, G. y Schupp, J. (eds.), Der Sozialstaat im XXI. Jahrhundert, Muenster.

Statz, Albert (1989), „Die Entwicklung der europäischen Integration –Ein Problemaufriß“, en Deppe, Frank, Huffschnid, Jörg, Weiner, Klaus (Eds), Projekt Europa. Politik und Ökonomie in der Europäischen

Sukup, Víctor (1993), “La Comunidad Europea; entre la integración y el nacionalismo”, en Ciclos en la Historia, la Economía y la Sociedad N° 4, 1er. Semestre.

Theret, Bruno (2007), “Les transformations de l’État social français depuis 1975: un analyse centrée sur les politiques de santé et menée au regard des standard typologiques et théorétiques du changement institutionnelle », en Économie appliquée, T. XV, No 1, marzo.

Urban, Hans-Juergen (2011), „Das neue Europa: Stabil und autoritär?“, en Bischoff, J., Deppe, F. Detje, R y Urban, H-J, Europa im Schlepptau der Finanzmärkte, Hamburgo.

Wehr, Andreas (2004), Europa ohne Demokratie? Die europäische Verfassungsdebatte –Bilanz, Kritik und Alternativen, Colonia.

Ziltener, Patrick (1999), Strukturwandel der europäischen integration. Die Europäische Union und die Veränderung von Staatlichkeit, Münster.